

El giro a la izquierda en los Gobiernos Locales de América Latina

Créditos:

Coordinación: Fernando Carrión M. y Paúl Ponce S.

© 5ta avenida editores

Dirección editorial: Pablo Salgado J.

Diseño gráfico: Editorial El Conejo

Corrección de estilo: Mauricio Alvarado Dávila

Diseño portada: Antonio Mena

5ta. Avenida Editores

Av. 12 de Octubre N24-739 y Colón

Edif. Boreal, Torre A, Of. 1508

23826901 – 26020761

www.lagranmanzana.com.ec

ISBN: 978-9942-8524-2-7

Impresión:

Ecuador, marzo 2015

© Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este libro sin la expresa aprobación de los editores.

Índice

Pág.

7 Presentación

1. Introducción

Devolver la polis a la ciudad

11 *Fernando Carrión M. y Paúl Ponce*

2. Giro a la izquierda en América Latina

El giro a la izquierda en los Gobiernos locales de América Latina

21 *Fernando Carrión M.*

Una mirada panorámica a la primera ola local de la izquierda

57 *Benjamín Goldfrank*

3. La construcción nacional de la izquierda en lo local

El avance y la consolidación de la izquierda brasileña en el escenario político del pos- 85. Un breve análisis de la trayectoria del Partido de los Trabajadores (PT) en los Gobiernos locales en Brasil

81 *Lina Magãhaes*

El FSNL y la participación ciudadana a nivel local en Nicaragua (2007-2013): ¿un nuevo escenario para la hegemonía política?

101 *Armando Chaguaceda*

Las relaciones entre lo nacional y lo local en el Ecuador: los gobiernos de izquierda en las dinámicas de ascenso al poder político

129 *Sebastián Mantilla*

4. Las ciudades precursoras de la izquierda

La izquierda política en las elecciones subnacionales de Lima Metropolitana

1 Porto Alegre: participación contrahegemónica, efecto-demostración y deconstrucción del modelo

179 *Luciano Fedozzi*

La ciudad de los sueños y las pesadillas. Rosario y su política de desarrollo local (1995-2013)

213 *Oscar Madoery*

Montevideo frenteamplista: Del Gobierno de la ciudad al Gobierno Nacional (1990-2015)

237 *Altair Magri*

5. La contemporaneidad de la izquierda y su legitimidad política

Gobiernos de izquierda en Bogotá: retos del fenómeno político

265 *Sergio García*

La izquierda en el Gobierno de Quito cuando la ciudad sucumbe frente al centro y la nación

291 *Felipe Burbano de Lara*

¿Construyendo ciudadanía desde la izquierda? El caso de La Paz

333 *Moirá Zuazo*

6. La izquierda en las grandes ciudades

Políticas sociales y construcción de ciudadanía en un Gobierno de iz-

367 *Alicia Zicardi/Lucía Álvarez*

La política urbana del Partido de los Trabajadores en el Brasil: De la utopía al impasse

407 *Erminia Maricato*

Los municipios en Santiago de Chile: una entrada fragmentada de la izquierda

439 *Danae Mlynartz*

5

La contemporaneidad
de la izquierda
y su legitimidad política

Gobiernos de izquierda en Bogotá: retos del fenómeno político

Sergio García¹

1 **Sergio García:** máster en Ciencia Política de la FLACSO Ecuador. Sus áreas de trabajo son los partidos políticos y el análisis electoral. Es autor del libro *Enemigos íntimos: El cambio en la dinámica faccional del Polo Democrático Alternativo en Colombia*. Actualmente se desempeña como profesor de ciencia política de la Universidad de las Américas (UDLA), en Quito, Ecuador.

En octubre de 2003, Luis Eduardo Garzón ganó la Alcaldía de Bogotá, haciéndose el primer alcalde de la capital colombiana proveniente de la izquierda. Para 2007, la Alcaldía sería ocupada por Samuel Moreno Rojas, miembro del partido del que era parte Garzón, el Polo Democrático Alternativo (PDA). Finalmente, en el siguiente proceso electoral, sucedido en 2011, salió elegido Gustavo Petro, quien fuera parte de la misma organización de izquierda pero que había salido de ella luego de denunciar actos de corrupción en la administración de Moreno. Con la última elección se sumaron tres administraciones gobernadas por personajes reconocidos como de izquierda o miembros de un partido de izquierda, lo que configuró un fenómeno político sin igual en el país y que parece que brinda elementos para ser comparado con otros Gobiernos locales de izquierda en la región.

El siguiente artículo explora los orígenes, trayectoria y carácter del fenómeno político de izquierda que alcanza el Gobierno en la capital colombiana; sigue los procesos electorales, principales logros y desafíos enfrentados por los dos primeros alcaldes en sus administraciones, y desemboca en el actual Gobierno de Gustavo Petro, en sus propuestas, la dura oposición a éstas de parte de ciertos sectores políticos y mediáticos y los procesos de revocatoria del mandato y pérdida de investidura en los que ha estado envuelto. Éstos han revelado la férrea oposición de ciertos sectores de derecha a una izquierda política, la incapacidad de superar al líder en los procesos de izquierda del país y la capital y la frágil estructura jurídica que legó la Constitución de 1991.

El Polo Democrático Alternativo: origen y trayectoria

Respecto del origen del PDA como coalición de izquierda han existido algunas menciones (Rodríguez, 2005; Estrada, 2007; Gantiva, 2007; Pérez, 2008;

Valencia, 2008). Entre las hipótesis manejadas por los autores para explicar su surgimiento está el desprestigio de la izquierda armada en Colombia y la crisis de los partidos tradicionales (Rodríguez, 2005), el surgimiento de un clivaje guerra-paz en el que el PDA tomó el segundo lugar (Pérez, 2008); y la reforma política de 2003 (Estrada, 2007; Pérez, 2008; Valencia, 2008).

Lo más probable es que existan dos explicaciones para su origen y su ascenso como actor político: una de carácter institucional y una que se ubica como estrategia en cierta coyuntura política. La explicación institucional corresponde tanto a la apertura del sistema político con la Constitución de 1991, como a los incentivos que en términos de agrupamiento en organizaciones mayores otorgó la Reforma Política de 2003². La última explicación asume que la alta favorabilidad del proyecto político del entonces presidente Álvaro Uribe, que fue reelegido en 2006, favoreció el proceso de unidad política de dos agrupaciones de izquierda, Polo Democrático Independiente (PDI) y Alternativa Democrática (AD), conformando así el PDA. La alta favorabilidad de Uribe hizo esta alianza estratégicamente conveniente.

Para entender la explicación institucional conviene hacer un breve recorrido por la historia partidista colombiana. Para Gilhodes (1996), el Partido Liberal y el Conservador se presentaron desde mediados del siglo XIX como organizaciones que cubrieron casi todas las preferencias electorales. En su organización interna, ambos partidos estuvieron por mucho tiempo divididos en dos o tres fracciones, lideradas por cabezas nacionales; las que aglutinaban alrededor de ellas a los líderes regionales y aseguraban la unidad partidista (Duque, 2006). Pero estos partidos verían descendidos sus apoyos electorales hacia finales del siglo XX, abriendo el espacio para nuevas organizaciones y partidos, entre ellos, la izquierda. Esta pérdida de apoyo electoral es resultado de una serie de cambios institucionales que acentuarían lo que para algunos autores era un proceso de fractura crónico dentro de los partidos tradicionales (Boudon, 2006; Pizarro, 1997).

2 Luego del auge del conductismo y la teoría de la elección racional como enfoques de la ciencia política, las explicaciones institucionales han sido revitalizadas recientemente con el desarrollo del *neoinstitucionalismo*. El planteamiento central de este enfoque es que en las instituciones políticas es posible encontrar explicaciones a ciertas acciones, comportamientos o preferencias de los actores políticos. La novedad con respecto al institucionalismo del siglo XIX es que se advierten diversos acercamientos metodológicos al estudio de las instituciones formales y no formales (Peters, 2003).

El primero de los cambios institucionales que acentuó la fragmentación del partido Liberal y del Conservador, a la vez que el desarrollo y la aparición de nuevas fuerzas, fue el establecimiento de la elección popular de alcaldes en 1986 y la de gobernadores en la Constitución de 1991. Aunque no se aplicó sino hasta 1988, la elección popular de alcaldes propició que los líderes regionales de los partidos se desprendieran gradualmente del cobijo de los grandes líderes nacionales (Duque, 2006). Con el establecimiento en la Constitución de 1991 de la elección popular de gobernadores, se abrió camino a un proceso que favoreció que nuevas fuerzas políticas pudieran acceder a Gobiernos de orden regional y local a la vez que alejarse de las grandes etiquetas partidistas a nivel nacional. Resulta obvio que, sin este cambio, no es posible entender la llegada de la izquierda a la capital.

En segundo término, el carácter de acuerdo incluyente propio de la Constitución de 1991 permitió que en muchas de sus definiciones del funcionamiento del sistema político se desarrollaran elementos que acentuarían la fragmentación de los partidos históricos y la emergencia de nuevas fuerzas. Uno de lo más evidentes fue la flexibilización de la creación de movimientos políticos, en una dinámica que para Jaime Calderón Brugés (1994) igualaba a los partidos establecidos con nuevas formaciones políticas de organización mucho más simple. La Constitución estableció que, para fundar un partido o movimiento político, solo era necesario recoger 50 000 firmas, ser elegido por igual cantidad de votos o alcanzar una curul en el Congreso de la República. Según la Carta, dichos partidos y movimientos podían avalar candidatos a elecciones locales, regionales o nacionales (Constitución Política de Colombia, 1991: artículo 109).

Esta flexibilización no solo permitió que surgieran nuevos partidos y movimientos y ajenos a los partidos Liberal y Conservador, sino que dentro de ellos se estableciera un grupo de nuevos movimientos y partidos con origen en sus congresistas, que solo acudían a la etiqueta nacional en elecciones presidenciales, mientras mantenían la suya en elecciones locales, regionales o parlamentarias (Duque, 2006).

En términos generales, gracias a la flexibilización en la creación de los partidos y movimientos y a la posibilidad de la doble militancia —local, regional y parlamentaria en la nueva etiqueta; y presidencial en la etiqueta tradicional—, el sistema partidista colombiano elevó de manera considera-

ble el número de partidos y movimientos políticos en disputa electoral. No solo ingresaron al sistema nuevos partidos (de izquierda, religiosos, étnicos y comunitarios), sino que dentro de los partidos tradicionales se acentuó la fragmentación de sus liderazgos en niveles locales o regionales.

La siguiente tabla muestra la proliferación de nuevos movimientos y partidos políticos en las elecciones al Congreso de la República:

Tabla N.º 1
Número de partidos o movimientos políticos que participaron en las elecciones al Congreso entre 1986 y 1998

	1986	1990	1991	1994	1998
Senado	4	6	16	24	41
Cámara	4	6	18	22	32

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (www.registraduria.gov.co) y de www.observatorionoelectoral.org

Finalmente, y en una dirección diferente a la de la Constitución de 1991, la Reforma Política de 2003 pretendió poner orden en el sistema partidista colombiano. La misma establecería una serie de requisitos, “la mayoría de ellos orientada a contrarrestar la atomización electoral y la desorganización de los partidos” (Novoa García, 2003). Entre las medidas que perseguía ese fin se encontraban la institucionalización de listas únicas por partido, el cambio del sistema de repartición de curules, el establecimiento de la superación de un umbral mínimo como requisito para la elección de las mismas y el mantenimiento de la personería jurídica, así como la prohibición de la doble militancia.

Después de que la Reforma Política fue aprobada, se hizo claro que los movimientos y partidos pequeños tendrían dificultad de alcanzar el umbral del 2 % de los votos válidos. Un grupo de partidos y movimientos

se unieron en distintas etiquetas de mayor envergadura. Fue tal la incidencia de la Reforma Política que, tan solo cuatro días después de aprobada, los miembros de la coalición del Polo Democrático (el PDI y AD) analizaron que era estratégicamente inadecuado competir electoralmente de forma separada y no llegar a un acuerdo³.

En resumen, los diseños institucionales sucedidos desde 1986 han jugado en tres distintas formas un papel en el surgimiento del PDA. En primer lugar, han acentuado un proceso de fragmentación interna de los partidos políticos tradicionales que se hizo visible en la cantidad de movimientos y partidos que surgieron desde dentro del partido Liberal y del Conservador. En segundo lugar, favorecieron el surgimiento de nuevas fuerzas políticas de orígenes religioso, étnico y regional, ajenas a los partidos tradicionales. Finalmente, con la Reforma Política de 2003 incentivaron a los dos grandes bloques de izquierda política –PDI y AD— a unirse en lo que sería el PDA.

De no haber sucedido ninguno de estos diseños institucionales, el panorama político sería uno completamente distinto. Sin la elección popular de alcaldes y gobernadores, los liderazgos locales la habrían tenido más difícil en la hora de separarse de los grandes liderazgos nacionales de los partidos tradicionales, así como de autonomizarse y formar nuevas etiquetas partidistas. En segundo lugar, sin la flexibilización de los requisitos electorales, no habría tenido tal proliferación el número de nuevos movimientos que se presentaron entre 1991 y 2003. Finalmente, sin la Reforma Política de 2003, no se habría hecho necesario conformar organizaciones de mayor envergadura que se enfrentasen a los nuevos requisitos en términos de umbral y fórmula electoral.

La explicación final al origen del PDA reside en la idea de la aparición y la prominencia política de la figura de Álvaro Uribe Vélez –prime-

3 Esta reforma en particular sería de importancia para la cuestión que nos preguntamos. Para Jairo Estrada: “[La reforma] impuso a las fuerzas democráticas y de izquierda (generalmente fragmentadas en los procesos electorales) el imperativo de buscar nuevas formas de agrupamiento” (2007: 314). A su vez Fernando Giraldo dice que “los partidos y movimientos creados [después de la Reforma del 2003] son producto de la necesidad de adaptarse a los contenidos de la reforma constitucional de ese año...” (2007: 131). Para Nadia Pérez (2008): “[A los diferentes movimientos que conformaron el PDA] el cambio en el sistema electoral les obligaba a cohesionarse por el partido” (2008: 49). Por su parte, Jorge Gantiva afirma que la unidad y surgimiento del PDA “fue presionada por la reforma política impuesta por el Gobierno de Uribe” (2007: 4).

ro como candidato presidencial de sumo éxito y luego en su rol de presidente de Colombia— como factor decisivo en la agregación política del PDI y AD. La tesis tras ella es que la posición de Uribe de *mano dura* en el conflicto armado colombiano y de incentivación de la inversión externa en el marco de políticas de ajuste, conformó en sus apoyos políticos un sector claramente asociable como de *derecha*. Asimismo, que la prominencia de su figura y sus apoyos obligó a los restantes partidos a ubicarse y configurarse en relación con tal (Pérez, 2008).

Para César Rodríguez (2005), el consolidado apoyo electoral del expresidente Uribe fue una de las causas del fortalecimiento de la izquierda política en Colombia. En sus propias palabras, el surgimiento del Polo Democrático “debe entenderse como la contraparte de un proceso paralelo de consolidación de una nueva derecha en el país” (2005: 194). De cara a un fortalecimiento de un proyecto político que privilegiaba la vía armada en la resolución del conflicto colombiano y una serie de medidas acordes con los ajustes económicos propios del neoliberalismo, el PDA se hizo una respuesta que intentaba ejercer un contrapeso a una directriz política definida. En ese orden de ideas, para Luis Carlos Valencia, “lo que posibilita la aparición del PDA es que surge como una opción de oposición al gobierno de Uribe, expresando, por tanto, una propuesta alternativa al paradigma del autoritarismo” (2008: 42).

En resumen, la alta favorabilidad de Álvaro Uribe y su proyecto político hizo que todos menos dos de los partidos se alinearan con el mismo. En ese contexto, el espacio político fomentaba la consolidación de un proyecto de oposición claro, al que la agregación de las fuerzas de izquierda en el proyecto alterno del PDA parecería responder. En caso de no suceder el fenómeno político que constituyeron Uribe y los sectores que le acompañaban, es posible visualizar un panorama en el que las diferencias internas de los sectores de izquierda se hubiesen hecho mucho más importantes. En el caso del *terremoto* político que significó Uribe, las diferencias internas se atenúan en pro de competir con un proyecto político tan reaccionario.⁴

4 Luis Eduardo Garzón manifestó en una ocasión, luego de las elecciones presidenciales de 2002: “La oposición no la produzco yo, sino el mismo Uribe”, en “Uribe aspira a ser el nuevo Fujimori”, en *El Tiempo*, 28 de octubre de 2002.

En conclusión, es posible reconocer una serie de procesos que contribuyeron a que surgiera el PDA como coalición de PDI y AD. En primer lugar, fue posible gracias a una serie de diseños institucionales que acentuaron la crisis de los partidos tradicionales y ayudaron el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, a la vez que, posteriormente, hicieron rentable la agregación (Reforma Política de 2003). En segunda instancia, tuvo lugar como respuesta política al fenómeno político que constituyeron Álvaro Uribe y los sectores alineados con éste.

Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno: la apertura en la capital y la debacle del partido

Luis Eduardo Garzón: “no hay escenario donde yo llegue y no logre hacer que converja hacia mí. Soy un aglutinador innato”.

Luis Eduardo Garzón, en “De sindicalista bacán a duro de la política”, *El Tiempo*, 25 de junio de 2000

Es claro que Garzón nunca fue un típico líder de izquierda. Su discurso y su personalidad le hicieron sobresalir durante el debate televisivo realizado a los candidatos presidenciales en marzo de 2002. En dicho debate, Garzón sorprendió al país con un discurso ameno, ajeno a la pesadez atribuida a los candidatos de izquierda tradicionales y, en términos generales, se robó la noche (revista *Semana*, 25 de marzo de 2002). Dicho suceso, sumado al apoyo desplegado por senadores y representantes de muy elevada votación en las elecciones legislativas de ese año, aunó a favor del ascenso en las encuestas de Garzón. La propuesta de Garzón de abogar por la reconciliación, en momentos en los que el candidato de mayor aceptación, Álvaro Uribe, proponía mano dura contra la guerrilla, le hizo pronto la antítesis de éste. El discurso moderno de Garzón abrió entonces un espacio en los medios para la nueva coalición de izquierda que se estaba formando.

Gracias a ese discurso ajeno a la izquierda ortodoxa, al apoyo desplegado por el grupo de parlamentarios que le apoyaron y a la identificación de Garzón como antítesis de Álvaro Uribe (un aspecto que no cubría a Horacio Serpa o Noemí Sanín, los otros dos candidatos de importancia), Garzón superó a Noemí Sanín y logró el tercer puesto en la contienda. Los principales líderes del entonces PDI, Antonio Navarro Wolf, Samuel Moreno Rojas y Jaime Dussán,

convinieron entonces en postular a Garzón como candidato del Polo Democrático Independiente a la Alcaldía de Bogotá.

En el arranque de la campaña por la Alcaldía, hacia julio de 2003, había un claro líder en las preferencias en las encuestas: Juan Lozano. Lozano registraba el 32 % de la intención de voto, frente a un 19 % de María Emma Mejía y tan solo un 17 % de Lucho Garzón (revista *Semana*, 14 de julio de 2003)⁵.

Frente de estos contendores, Garzón comenzaba a destacarse por presentar una imagen espontánea y ajena al establecimiento. Paralelo a las campañas locales y departamentales, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe comenzó a impulsar un referendo entre los ciudadanos, frente al cual el único candidato de la baraja ya mencionada que se oponía abiertamente era Garzón. Esto ayudó a que se consolidara como la contraparte, como el único candidato cuya campaña en ese entonces no se basaba en hablar bien de Uribe y Peñalosa, sino en resaltar sus defectos” (revista *Semana*, 4 de agosto de 2003). Aunque Garzón aún era tercero en las preferencias, crecía en la percepción que de un lado estaba la mayoría de candidatos y del otro él.

A mediados de octubre, y ya a una semana de las elecciones, las encuestas de preferencia de voto confirmaron la ascendente campaña de Garzón y la definición de la contienda como una entre Lozano y éste. Garzón ganó la alcaldía con el 46, 29 % de los votos válidos, frente al 39, 58 % de Lozano.

Garzón también logró mayoría en el Concejo de la ciudad con una bancada que incluía los miembros del Polo, liberales, conservadores y un grupo de independientes (*El Tiempo*, 28 de diciembre de 2003). Esto garantizó apoyos a las medidas y proyectos desarrollados en el inicio de su Gobierno. Sin embargo, para enero de 2005 comenzaron a suceder roces entre Garzón y el partido, en razón de mutuos señalamientos de exclusión de la organización en el Gobierno y falta de apoyo de la bancada al mandatario (*El Tiempo*, 14 de enero de 2005).

5 Lozano, que tenía el aval de Colombia Siempre, tenía a su favor tres asuntos en particular. En primer lugar, haber comenzado la campaña mucho antes que sus contrincantes; en segunda instancia, el apoyo y representar la continuidad de la gestión del popular exalcalde Enrique Peñalosa, que, junto a Antanas Mockus, había transformado significativamente la ciudad; finalmente, ser directivo de City TV, el canal local de la capital, lo que ayudó a que se hiciera visible entre los electores. La segunda en las encuestas, María Emma Mejía, se presentaba respaldada por las firmas del movimiento Firmes por Bogotá. Mejía se había desempeñado como ministra de Educación y ministra de Relaciones Exteriores en 1995 y 1996, respectivamente, y como embajadora de Colombia en España. Se presentaba por segunda vez como candidata a la Alcaldía de Bogotá, luego de haber sido derrotada por Antanas Mockus en 2000.

Garzón comenzó a perder espacio dentro del PDA, pues existía un sector del mismo que consideraba su Gobierno un mal ejemplo para lo que el partido debía ser, y sus candidatos a distintas posiciones en la organización fueron derrotados —María Emma Mejía en la lista al Congreso y Antonio Navarro en la disputa por la candidatura presidencial— (*El Tiempo*, 15 de marzo de 2006).

Dos sucesos ilustran este distanciamiento. Con ocasión del paro de transportadores que paralizó la capital del país a inicios de mayo de 2006, Garzón lanzó fuertes críticas al PDA por la falta de soporte institucional a sus medidas para superar el paro. Agradeció al presidente Uribe y a miembros de la coalición uribista su apoyo y, en general, criticó la mirada de algunos miembros del partido a los que acusó que no sabían cómo se ejercía gobierno⁶.

Luego, y más tarde ese año, Garzón se confirmaría en sus críticas al partido. El alcalde diría que había miembros del PDA que lo creían superado, que no entendían que una cosa era ser Gobierno y otra protestar, que buscaban ruptura cuando lo que él hizo había sido una transición seria y que se solidarizaba con Uribe en su papel de gobernante⁷. Para re-

6 Dijo Garzón en esa ocasión: “Samuel Moreno (presidente del Polo) llama y me dice, a título personal, yo lo apoyo. Cuál, si yo no estoy convalciente (...). Yo necesito que el Polo diga qué piensa de este Gobierno, institucionalmente, si lo apoya o no, cómo ve sus programas. Pero eso de que le digan a uno: oiga, sí, yo pienso mucho en usted (...). Juan Manuel Santos me apoyó sin vacilación, Germán Vargas Lleras y Cambio Radical también (...), ¿el Polo me va apoyar, sí o no? Apoyos condicionados, eso no, eso es baboso (...). Institucionalmente, ni me está apoyando ni me ha apoyado (...). Hay unos que vienen de izquierda, que están en el Polo, que protestan hasta contra su propia sombra. Nunca han gobernado, no han gobernado nada, y entonces quieren a toda a hora que yo me porte en función de un activista”. (*El Tiempo*, 8 de mayo de 2006).

7 Garzón dijo en una entrevista: “Hay gente del Polo que está trabajando conmigo; hay otra gente que me declaró ya, tierra rasada. Yo no tengo ninguna ruptura: ni me declaro solo, ni me han echado. Pienso, sí, que hay que luchar por una convergencia para el 2010 (...). Una cosa es hacer oposición y gritar que todo es malo y otra es gobernar. Yo fui oposición de protesta. Ahora soy Gobierno y eso cambia. No conozco una agenda de izquierda que haga cosas de Gobierno, y esa es la diferencia (...). El Gobierno me cambió, porque aprendí. Aprendí que uno no puede estar gritando abajo a todo. Si estoy gobernando, ¿a quién le echo la culpa? (...). (algunos sectores del PDA) querían un Gobierno de ruptura, y yo no lo he hecho. He hecho un gobierno de transición que demuestra que la izquierda es capaz de gobernar, que no se roba la plata, que gobierna bien, que hace gestión y hace concertación (...). Respeto mucho la posición crítica de quienes consideran que he debido hacer Gobierno de ruptura. Yo no soy eso. Prometí siempre una Bogotá moderna y humana. Eso quiere decir continuidad en lo que había y énfasis en los cambios sociales, y en eso he logrado éxitos muy importantes, como los reconoce todo el mundo, en educación, política sin hambre, salud (...). Hay gente que considera que, como no hicimos un Gobierno de ruptura, es un acto de traición. Otros consideramos que un Gobierno de ruptura era un suicidio (...). Yo soy absolutamente solidario con el presidente Uribe. Ambos sabemos lo que es el día a día de un gobernante” (*El Tiempo*, 9 de septiembre de 2006).

sumir el distanciamiento, un sector del PDA no se sintió representado en la Alcaldía, se lamentaba, que no haya sido el Gobierno de Garzón “más de izquierda”, y se evitaron las alusiones a la administración de Garzón en las candidaturas a Gobiernos locales. Garzón, por su parte, manifestaba que quería un PDA más centrado, lo que era imposible en el momento por las mayorías de la facción de izquierda tradicional y Anapo (revista *Cambio*, 12 de diciembre de 2007).

En su gestión como alcalde, Garzón procuró combinar el desarrollo que en términos urbanísticos y de movilidad había tenido la ciudad con programas enfocados a aspectos sociales. Dos de sus programas estrella fueron Bogotá Sin Hambre y Bogotá Sin Indiferencia. El primero de ellos trataba de atender a aspectos de vulnerabilidad alimentaria y nutricional entre población con altos índices de pobreza; el segundo procuraba construir varios colegios públicos de altos recursos en sectores marginados para lograr que los jóvenes de estas zonas no fuesen excluidos del circuito de calidad educativa.

En términos generales, el Gobierno de Garzón se separó de la línea cívica que Antanas Mockus, alcalde previo, había establecido, pero también de la transformación urbanística y tecnocrática que Enrique Peñalosa imprimió luego de la gestión del primero. No se constituyó el Gobierno de ruptura que el partido esperaba, sino que abrió el espacio a ciertos temas sociales dentro de una ciudad.

Samuel Moreno Rojas

“En el futuro, los candidatos tienen que tener un partido organizado, que se sintonice con las necesidades de la gente. Las individualidades, por más populares que sean, quedarán tendidas en el piso”, Samuel Moreno, *El Tiempo*, 15 de Marzo de 2006.

El siguiente alcalde de Bogotá sería Samuel Moreno Rojas, presidente del PDA durante gran parte de la administración de Garzón. Moreno Rojas era el heredero natural de la Anapo (Alianza Nacional Popular), organización fundada por el exdictador colombiano Gustavo Rojas Pinilla, abuelo de Moreno Rojas. Dicha organización aparecería como

partido para competir en elecciones en 1962 y, debido a que durante el Frente Nacional solo competían el Partido Liberal y el Conservador, se cobijó bajo la etiqueta conservadora y liberal (Duque, 2006).

Soportada en la movilización de estratos bajos y urbanos, la Anapo vivió un creciente desarrollo electoral que tuvo su pico en las elecciones de 1968 y 1970 (Payne, 1968; Leal, 1973; Dix, 1980; Ayala, 1995; Duque, 2006). Esto se debió, en parte, a la combinación de nuevas y viejas fuerzas políticas⁸. En 1970, la organización consiguió su participación electoral más importante. Rojas Pinilla se presentó en las elecciones presidenciales compitiendo contra Misael Pastrana Borrero, el candidato del partido Conservador y el Partido Liberal. Pastrana ganó por muy poca votación, lo que llevó a acusaciones de fraude por parte de la Anapo (Duque, 2006).

Luego de haber alcanzado un tercer puesto en las elecciones presidenciales de 1974 con la hija de Rojas Pinilla, María Eugenia Rojas, la Anapo se unió al AD-M19 para participar de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Su principal figura política para entonces era Moreno Rojas, quien había trabajado como jefe de debate en las campañas liberales de Virgilio Barco y César Gaviria, elegido senador entre 1991 y 2002. Moreno Rojas uniría la Anapo al PDI, y luego de la unión con AD se haría el presidente del partido entre enero de 2005 y junio de 2006, cuando dejó esa posición para participar en la carrera a la Alcaldía de Bogotá. (*El Tiempo*, 21 de Junio de 2006). En su precandidatura fue apoyada, por Jaime Dussán y Jorge Robledo, sectores más radicales en el partido, y venció a María Emma Mejía, apoyada por el entonces alcalde Luis Eduardo Garzón (*El Tiempo*, 9 de julio de 2007).

Tras la consulta por la candidatura, Moreno Rojas ascendió en las encuestas y alcanzó un empate técnico con Enrique Peñalosa, exalcalde

⁸ En palabras de Duque (2006): "Aunque la Anapo fue creada y construida sobre la base del nombre y la figura de Gustavo Rojas Pinilla, este nuevo movimiento anti Frente Nacional sirvió de vehículo a algunos políticos vinculados a los partidos tradicionales para acceder o mantenerse en el congreso de la república. En tal sentido, representó una oportunidad y mayores posibilidades de éxito electoral. De igual forma, muchos nuevos políticos regionales accedieron por primera vez al congreso a través de esta nueva fuerza política en ascenso. Así, desde sus inicios, la Anapo se constituyó como una amalgama de políticos vinculados a los partidos tradicionales y de nuevos aspirantes al Congreso de la República" (Duque, 2006: 165).

de la ciudad. Sectores liberales se adhirieron a su campaña, y para octubre ya lideraba en las encuestas. A pesar de menciones personales del presidente Uribe en el sentido de “no votar por personas que son apoyadas en la página de Internet de las FARC, que no rechazan de manera contundente el terrorismo, que mantiene por ahí espacios para compartir con el terrorismo” (*El Tiempo*, 27 de octubre de 2007), Moreno Rojas sería elegido alcalde el 28 de octubre de ese año (*El Tiempo*, 29 de octubre de 2007).

Durante su mandato como gobernante de la capital, Moreno Rojas y su hermano Iván Moreno Rojas se verían envueltos en críticas y denuncias relacionadas con un manejo clientelar de la administración. Pero con Samuel Moreno como alcalde, la dinámica entre el gobernante y el partido fue diametralmente opuesta. Al pertenecer a la facción que junto a la izquierda tradicional mantenía las mayorías dentro del partido, Moreno fue defendido públicamente por las directivas de la organización cuando se vio envuelto en críticas de corrupción o clientelismo (*El Espectador*, 7 de julio de 2008). La excepción a ello vendría de Gustavo Petro y la facción del senador Avellaneda, que denunciaron que la administración de Moreno presentaba un alto nivel de clientelismo y que no se estaba manejando bien la ciudad (*El Espectador*, 18 de febrero de 2009, y *El Tiempo*, 20 de octubre de 2010)⁹.

Moreno Rojas no terminó su mandato, debido a que la Procuraduría le dictó pliego de cargos el 3 de mayo de 2011 por errores en el estudio realizado para el Metro de Bogotá (*El Espectador*, 4 de mayo de 2011). El partido finalmente se alejó de él al suspender su militancia y solicitar

9 Petro diría de la administración de Moreno: “Es grave que en el Polo exista una agrupación degradada a niveles que califico de corrupción, como se mueve al frente de la Alcaldía de Bogotá, que se ganó en las elecciones (...). Su lógica de administración es clientelar y de capacidad de otorgar contratos. Es decir, la corrupción (...). La ejercen funcionarios y contratistas de otros partidos. Pero tiene impacto en el interior del PDA por la alianza establecida para garantizar su dirección. Sin esa alianza, habría sido fácil aislar a los corruptos, que no son la mayoría del Ejecutivo. Una paradoja: logran mayoría a partir de la alianza con la izquierda tradicional, es decir, Partido Comunista y MOIR. ¿Por qué estas agrupaciones, en vez de apoyar un proyecto de izquierda democrática como el que enarbola Petro para conducir el Polo, le entregan éste a la tendencia encabezada por Iván Moreno?”, en <http://www.desdeabajo.info/index.php?edicion=207-edicion-160/7600-entrevista-a-gustavo-petro-enfrentar-al-gobierno-en-su-proyecto-neoliberal-aliarnos-en-la-lucha-contra-las-mafias.html> (consultado el 2 de septiembre de 2010).

su renuncia, pero el daño ya estaba hecho y el PDA había sido asociado a uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia política reciente del país (*El Tiempo*, 5 de mayo de 2011). Hacia septiembre del mismo año, Moreno Rojas fue detenido y actualmente se encuentra privado de su libertad.

Como conclusión, la izquierda ganaría de forma consecutiva la Alcaldía de Bogotá, pero en circunstancias con características y desarrollos muy distintos. El triunfo de Garzón fue la confirmación del ascenso del PDA como alternativa política válida en el país y como una izquierda que podía gobernar, acercarse a las posiciones de poder y no necesariamente representar la violencia o radicalidad asociada con la vía armada. La gestión de Garzón implicó un pragmatismo que le alejó del partido, pero en sectores políticos del establecimiento se le abrieron las puertas como interlocutor válido.

Por el contrario, el candidato del partido que se presentó para las nuevas elecciones lo hizo apoyado por los sectores de izquierda más ortodoxos, si bien él mismo perteneció a la clase política más tradicional. Moreno Rojas continuó las políticas sociales de Garzón y comenzó los estudios en torno a la construcción del Metro, pero terminó con bajísimos niveles de aceptación y depuesto ante denuncias de corrupción.

En tal contexto, era muy difícil que el partido volviese a ganar las elecciones a la Alcaldía, y, en efecto, las encuestas golpearon a los posibles participantes de la organización. Sin embargo, Gustavo Petro había denunciado desde el interior del partido a Moreno Rojas y, luego de haber sido candidato presidencial del PDA, renunció a la organización y se lanzó a la Alcaldía de Bogotá por el Movimiento Progresista, logrando lo que pocos creían posible: ganar por tercera vez consecutiva la Alcaldía para un personaje o partido de izquierda.

Gustavo Petro: más que la lucha en torno a la administración

“Si (...) me destituyen, lo que viene es un cierre de la democracia (...). Lo que produce el cierre de la democracia es más violencia. Por eso, la paz no es más que ampliar la democracia” (Gustavo Petro, en revista *Semana*, 5 de noviembre de 2013).

Gustavo Petro, en “Gustavo Petro: el Ministerio de Agricultura, ¿que ni se lo ofrezcan?”, en *El Tiempo*, 27 de junio de 2010.

Cuando se rompió el proceso de paz llevado entre Belisario Betancur y el M-19, uno de los personajes encarcelados en la contraofensiva del Gobierno fue Gustavo Petro. Una vez liberado se hizo miembro del grupo de desmovilizados liderado, por Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolf y fue elegido por AD-M19 como representante a la Cámara en 1991. Luego de haber sufrido amenazas en su contra, se exilió y fue nombrado agregado diplomático para los Derechos Humanos en la Embajada de Colombia en Bruselas (1994-1996). Posteriormente, Petro retornó al país para ser elegido como segundo renglón de Antonio Navarro Wolf (Vía Alterna), en 1998.

En 2002 sería reelegido de nuevo por Vía Alterna y, dentro de la coalición del Polo, comenzó a destacarse como opositor del Gobierno de Uribe, al punto de que fue elegido por sus colegas y la prensa nacional como el mejor congresista del país¹⁰. El 18 de mayo de 2002, Petro denunció al senador Álvaro García Romero por complicidad en la masacre de Macayepo y dio inicio a una serie de investigaciones sobre la relación entre políticos y los paramilitares, en lo que terminó conociéndose como “la parapolítica” (*El Tiempo*, 19 de mayo de 2002).

El carácter de sus denuncias contra el popular Gobierno de Uribe y su pasado como guerrillero le llevaron a ser un político polémico y uno de los personajes políticos más reconocidos dentro del Congreso. Petro resultó reelegido al Senado en 2006 y continuó con denuncias de corrupción o relaciones entre los partidarios del Gobierno de Uribe y grupos ilegales (revista *Semana*, 30 de mayo de 2009).

10 Fuente: http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2010/primer_a_vuelta/candidatos/gustavo_petro/trayectoria.asp. consultado el 24 de abril de 2010.

Hacia 2007, en el marco de una serie de acusaciones contra el presidente Uribe y su pasado político en Antioquia, Petro sorprendió al proponer un gran acuerdo nacional en el que todos los sectores políticos y alzados en armas tuviesen parte. Dicho acuerdo nacional implicaría, según Petro, cinco puntos: un reconocimiento de que el proyecto paramilitar había fracasado como alternativa al conflicto armado, una ampliación de los espacios participativos locales, un rechazo al clientelismo como forma de hacer política, la estimulación de una economía regional capacitada para competir nacional e internacionalmente y la confesión de los hechos que rodearon el proyecto paramilitar. Cumplidos estos puntos, podrían otorgarse beneficios legales a cambio de un verdadero proyecto de reconciliación y reparación a las víctimas¹¹.

Una vez que Luis Eduardo Garzón se retiró del PDA, Petro decidió mantenerse en el mismo y competir en las elecciones internas de 2009. A pesar de la amplia favorabilidad de Carlos Gaviria, Petro sorprendió ganando la candidatura del partido y se hizo candidato en las elecciones presidenciales de 2010 (*El Tiempo*, 28 de septiembre de 2009). En esas elecciones alcanzó el cuarto lugar y el 9,50 % de los votos válidos (www.registraduria.gov.co). Luego de esto exigió la dirección del partido como candidato presidencial del mismo, lo que le fue negado y obligó su salida de la organización en diciembre de 2010 (*El Espectador*, 15 de diciembre de 2010).

Una vez fuera del partido, Petro formó junto a otro grupo de disidentes el Movimiento Progresistas y decidió lanzarse a la Alcaldía. A pesar de que competía contra otros dos candidatos sumamente fuertes (Enrique Peñalosa, exalcalde y parte de la transformación urbana de la ciudad, y Gina Parody, figura política en ascenso), Petro ganó las elecciones con 32,16 % de los votos. Peñalosa, el rival más cercano, solo alcanzó el 24,93 %.

La Alcaldía de Petro comenzó entonces el 1 de enero de 2012 con la oposición de dos frentes políticos en particular. En primer lugar, de los sectores de izquierda más radicales, los que no vieron con buenos ojos que denunciara a Moreno Rojas siendo parte de la organización que era el PDA. Petro era visto desde allí como una rueda suelta, alguien que no jugaba en equipo

11 http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=102246, Consultado el 1 de julio de 2010.

y que tenía posiciones muy sospechosas, tal y como alguna vez fue visto Luis Eduardo Garzón. En segundo lugar, de sectores políticos de derecha que veían en Petro, antiguo guerrillero, alguien de riesgo para el establecimiento. Como ya se dijo, Petro se destacó como férreo opositor en los dos Gobiernos de Álvaro Uribe y fue amenazado por grupos de extrema derecha ligados a sectores paramilitares.

No es de extrañar, entonces, que desde el comienzo de su administración hubiese fuertes críticas a los distintos programas propuestos por Petro. La primera de las discusiones giró en torno a la decisión de Petro de prohibir el porte de armas en lugares públicos con miras a reducir las altas cifras de inseguridad, medida que recibió críticas inmediatamente¹². Petro no tenía jurisdicción sobre el tema, y la medida correspondía al Ministerio de Defensa. A pesar de ello, el director de la Policía la apoyó, y a través de un decreto se implementó la medida, redujo las cifras de violencia (revista *Semana*, 6 de marzo de 2012).

En segundo lugar, Petro prohibió que la plaza de toros de La Santamaría, de propiedad de la administración, se utilizara para realizar corridas de toros. Esto, debido a que la Corporación Taurina de Bogotá se negó a respetar la vida del animal en las corridas. En sus palabras: “Es un contrato celebrado entre un mandante, que es el Distrito, para un mandatario (la Corporación Taurina), para hacer un mandado (las corridas de toros). Como el mandante dijo que las corridas dejarán de tener actos de crueldad, incluida la muerte del toro, y la Corporación Taurina no hizo caso, pues habrá un cambio” (revista *Semana*, 13 de junio de 2012). Las críticas, como en la medida de las armas, no se hicieron esperar¹³.

12 Incluso en los casos en los que se estaba de acuerdo se recordaba la condición de exguerrillero de Petro. Gina Parody, que compitió contra él por la Alcaldía, diría en una entrevista que: “Es una medida sana, me gusta y me parece que es una autoconfesión del peligro para una ciudad de tener ciudadanos armados, como lo estuvo el alcalde en su momento. He pensado que puede ser hasta un acto indirecto de perdón” (Revista *Semana*, 5 de enero de 2012).

13 El presidente de la Corporación Taurina, Felipe Negret, manifestó al respecto: “Al pedirnos que no se mataran los toros, el alcalde nos pidió un imposible. No podemos transformar la esencia ni la logística de las corridas de toros porque están consagradas en la ley. Esto es como si el alcalde de Zipaquirá pretendiera eliminar de la misa la Comunión con el argumento de que de esa manera se puede dar la misa. Y como quiera que la misa y los toros son una liturgia, una cosa es el querer y otra cosa es cómo está expresado en la ley” (revista *Semana*, 7 de junio de 2013).

Los medios de comunicación y los mencionados sectores políticos golpearon al Gobierno de Petro en estos y otros temas. Frente a la propuesta de Petro de garantizar un mínimo vital de agua para los estratos 1 y 2, se adujo que los recursos gastados serían enormes; cuando se comenzó a implementar el Sistema Integrado de Transporte (SITP), llovieron críticas sobre las fallas; las salidas de varios de los funcionarios de la administración (incluido Antonio Navarro Wolf, el reconocido líder de izquierda y exgobernador de Nariño) fueron interpretadas como seña de inestabilidad en el equipo del alcalde; y ante el cambio del Pico y placa por otra forma de ordenarlo, se dijo que el alcalde no sabía lo que estaba haciendo.

Pero fue en el intento de Petro de cambiar el esquema de basuras de la ciudad en lo que los opositores encontraron el tema que generaría más problemas sobre el burgomaestre. El alcalde decidió transferir la responsabilidad de la recolección de basuras de los empresarios privados hacia la administración de la ciudad, argumentando que los ingresos de los empresarios privados generaban sobrecostos en las tarifas de los usuarios. A pesar de la intención, y que durante cerca de un mes la administración preparó el cambio en el esquema de recolección, la Empresa de Aguas de Bogotá no logró prestar el servicio adecuadamente en los primeros días de diciembre de 2012, cuando debía hacerlo, lo que se visibilizó en los montones de basuras no recogidos (*El Espectador*, 22 de junio de 2013). La administración de Petro fue severamente criticada, y las dos alternativas más fuertes en su contra ganaron terreno: la propuesta de revocatoria de mandato y la apertura de un pliego de cargos por parte de la Procuraduría por faltas a la libertad de empresa.

Con respecto a la primera, Miguel Gómez, representante a la Cámara del Partido de la U, señaló que Petro debía salir de la Alcaldía por su incapacidad para manejar temas y el desgüeño administrativo expresado en el tema de las basuras (*El Tiempo*, 26 de enero de 2013). Gómez apareció en medios llamando a la revocatoria, pero ni siquiera hubo consenso en el interior de su partido, y los medios y el Gobierno del presidente Santos criticaron la propuesta de revocatoria como inconveniente. La posibilidad de la recolección de firmas y de llevar a las urnas el número de personas que validara el proceso era muy baja: se

requerían 289 mil firmas para comenzar el proceso y, luego, que 1 234 214 personas votaran en el hipotético proceso electoral, votando más de la mitad por la opción de la revocatoria¹⁴ (*El Espectador*, 22 de junio de 2013).

Pero, hacia junio de 2013, fueron aprobadas por la Registraduría Nacional las 357 mil firmas recogidas para la revocatoria de Petro (68 mil firmas más de las necesarias), y el proceso tomó importancia. La perspectiva de llevar a los votantes necesarios para validar el proceso ganó ante la posibilidad de unirlo a las elecciones presidenciales de 2014. De inmediato, Petro comenzó un proceso de defensa frente a la posibilidad de llevarse a las urnas la propuesta y criticó el proceso de aprobación de las firmas hecho por la Registraduría¹⁵ y el origen del mismo¹⁶. El proceso fue dilatado luego por una serie de recursos legales interpuestos ante la entidad encargada, pero finalmente, la Registraduría decidió ubicar como fecha de votación de la revocatoria el 2 de marzo (*El Tiempo* 3 de enero de 2013).

La situación con respecto al pliego de cargos de la Procuraduría y la posible pérdida de investidura de Petro resultarían mucho más preocupante y sería causal de la salida temporal del alcalde de su cargo. El organismo de control, que ya había suspendido a Samuel Moreno Rojas, y que es dirigido por Alejandro Ordóñez, un abogado que es reconocido como conservador y más cercano al uribismo que a la izquierda, levantó tres acusaciones de faltas graves contra el alcalde en junio de 2013: 1) haber

14 En Colombia han existido 93 solicitudes de revocatoria, de las cuales solo 38 han logrado llegar a las urnas y ninguna ha tenido éxito en ellas (Registraduría Nacional del Estado Civil).

15 El 9 de junio dijo que los grafólogos que revisaron las firmas eran los mismos de un escándalo de la Registraduría en el Valle del Cauca; el 12 de junio culpó a la entidad de solo haber realizado un muestreo y no una cuenta total; se quejó el 18 de junio del formato en que la Registraduría entregó las firmas para revisión de sus abogados; y el 19 de junio pidió una veeduría internacional para resolver la cuestión (*El Espectador*, 22 de junio de 2013).

16 Sobre el origen dijo: "Ahí confluyen unos intereses, desde el ciudadano que está ilusionado porque, si cambia el alcalde cree que se salvaría la ciudad, respetable, hasta los grandes intereses que quieren acabar el Gobierno progresista para retornar al poder en la ciudad. Entonces, por estar pendientes del ciudadano honesto, se pueden olvidar esos grandes intereses. Quien planteó aquí revocar el mandato del alcalde, antes de la posesión, fue el cartel de la contratación. De ahí sale la iniciativa, los primeros dineros y las estrategias para lograr que la mayoría de la población confluya con ellos" (Gustavo Petro, en revista *Semana*, 12 de octubre de 2013).

decidido que las empresas de la administración de la ciudad se hicieran cargo del servicio de recolección, 2) haber implementado por decreto el esquema, violando la libre empresa, y 3) el uso de volquetas no adecuadas para la recolección, con riesgo para la salud de los bogotanos.

Ante la posibilidad de que fuera destituido, Petro interpuso en octubre y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda por persecución y violación de sus derechos políticos por parte de la Procuraduría. En su opinión, no existían garantías judiciales en el Ministerio Público y el procurador general tenía una postura política que impedía la imparcialidad de la decisión (*El Espectador*, 26 de octubre de 2013). En una entrevista realizada a Petro, señaló que lo que había era una persecución contra el proceso de paz de sectores de derecha y que lo tomaba como parte. En sus palabras:

(El proceso de paz) Genera un ruido, y por eso hay que hacer los énfasis donde toca. El problema no está en las elecciones, sino en ganar la batalla de la paz. Esa es una batalla política y el primer escenario en esa batalla es Bogotá. Hay una estrategia andando para acabar el proceso de paz, de sectores de la extrema derecha que ganan en la guerra y le temen a lo que significaría una democratización del país. Son intereses que salen afectados si hay negociaciones, como los de los grandes propietarios de tierra en Colombia, incluidos políticos concretos, y el escenario es Bogotá (...). El proceso apenas empieza, la ciudad va a dar una batalla, y es una batalla política y una batalla social, y se verán los intereses cruzados. A mí me interesa mucho y me apasiona lo que estamos viviendo. La ciudad en cierta parte va a definir si fortalecemos la posibilidad de acabar la guerra o no. Imagínese este escenario: la presión de la extrema derecha sobre la Procuraduría hace que se destituya el alcalde. ¿Ganan la paz y la convivencia? ¿Cuál sería el escenario de un sistema político que no es capaz de aguantar un modelo de gobierno alternativo y democrático? (Gustavo Petro, en revista *Semana*, 12 de octubre de 2013).

En el mismo sentido afirmó: “Si (...) me destituyen, lo que viene es un cierre de la democracia (...). Lo que produce el cierre de la democracia es más violencia. Por eso, la paz no es más que ampliar

la democracia.” (Gustavo Petro, en revista *Semana*, 5 de Noviembre de 2013).

El 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría decidió inhabilitar a Petro por 15 años para ocupar cargos públicos y destituirlo como alcalde de la capital, generando sendas manifestaciones a favor del alcalde en la Plaza de Bolívar y toda una discusión en torno a las capacidades del procurador para destituir mandatarios elegidos a cargos públicos –Ordóñez ya había destituido a los alcaldes las otras dos ciudades más importantes del país: de Medellín, Alonso Salazar, y de Cali, Jorge Iván Ospina–(*El Espectador*, 9 de diciembre de 2013)—. Al día siguiente, las FARC declararon inconveniente para el proceso de paz esa decisión y recalcaron que opciones políticas como Petro eran mostradas por el establecimiento como la posibilidad de tener una izquierda política pacífica¹⁷.

La decisión del organismo de control fue apelada por el mandatario capitalino, pero, en una situación constitucional bastante criticable, la instancia que definía la apelación era la misma Procuraduría, que terminó confirmando la decisión el 14 de enero de 2014. Petro fue entonces des-

17 El comunicado de las FARC decía: “La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por designio del arbitrario procurador Alejandro Ordóñez signa un nuevo episodio en la cadena de atentados contra el establecimiento de una verdadera democracia en Colombia. La lógica reacción de la población bogotana y de los sectores democráticos de la nación, expresada en las redes sociales y copando la Plaza de Bolívar, convergiendo en la defensa de la democracia, es demostración de la conciencia extendida de que en nuestro país es urgente un cambio de las instituciones y la construcción de una democracia real. Colombia no puede seguir a merced de un fanático y despótico representante de la derecha más retardataria del país que pretende sabotear todos los procesos democráticos. Con Ordóñez, el país retorna a episodios lamentables de la historia, que poco o nada ayudan en la superación de las causas del conflicto, ni a la reconciliación de la ciudadanía. Su poder omnímodo, manifiesto en la persecución a las corrientes progresistas y a líderes como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, está directamente ligado con el proyecto fascista de Álvaro Uribe. La decisión del ultramontano procurador es otro grave golpe contra el proceso de paz de la Habana, que afecta la confianza y la credibilidad. Desde hace varios años el establecimiento ha insistido hipócritamente en que el éxito de la figura de Petro era la demostración que en Colombia es posible realizar actividad política de izquierda, sin armas. Ayer, de un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia, y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente. Paralelo a su discurso demagógico de paz, el régimen cada día perpetra hechos funestos que fortalecen el militarismo. La caverna que representan Ordóñez y Uribe pretende fortalecerse con la declaratoria de la muerte política de sus adversarios (...). Libramos una batalla entre una visión cavernaria de país, y otra en la que la paz con justicia social y la inclusión, puedan hacerse realidad algún día” (*El Espectador*, 10 de diciembre de 2013).

tituido e inhabilitado por quince años para ocupar cargos públicos, pero un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el fallo debido a las acciones de tutela interpuestas por el equipo legal del alcalde (*El Espectador*, 14 de enero de 2014).

De inmediato, la defensa de Petro tomó la ofensiva y solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares en el caso del alcalde (*El Espectador*, 20 de enero de 2014), porque el Consejo de Estado tenía la última palabra en la acción de tutela que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había acatado. En efecto, más de un mes y medio después, el 18 de marzo de 2014, el Consejo de Estado desestimó en segunda instancia la acción de tutela y dejó en firme la destitución de Petro (*El Tiempo*, 18 de marzo de 2014).

Gustavo Petro fue destituido entonces, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno colombiano la suspensión de la destitución. Envuelto en su propia crisis política, descendiendo en la intención de voto con miras a las elecciones de mayo de 2014, el presidente Juan Manuel Santos decidió no acogerse a la recomendación de la Comisión, confirmó la destitución de Petro y nombró a Rafael Pardo como alcalde interino. Santos consideró en ese momento que acoger las medidas tendría un costo político mayor que ignorarlas, y Petro debió salir de la Alcaldía (*El Espectador*, 20 de marzo de 2014).

De nuevo, la ventaja de Petro vendría del Tribunal Administrativo de Bogotá. Un magistrado ordenó al presidente Santos que restituyera la Alcaldía a Petro, como parte de una estrategia del equipo legal del alcalde, que interpuso más de 45 acciones de tutela. Una de ellas fue estimada por el magistrado del Tribunal, y Petro regresó al Palacio de Liévano, habiendo terminado, por ahora, el drama de la destitución y la inhabilidad de la Procuraduría (revista *Semana*, 24 de abril de 2014).

Tanto el proceso de revocatoria de mandato como el de pérdida de la investidura han sido los dos más grandes escollos del alcalde en su mandato. Con el segundo aparentemente superado, el primero retomó su curso y ya están definidas las fechas para la votación de la revocatoria (un proceso mucho más difícil de salir adelante, por las razones expresadas antes). La diferencia de ambos ejercicios contra Petro no es menor. El primero de ellos representa un ejercicio constitucional y

que se validaría o no a través de un proceso democrático, mientras que el segundo tiene serias sospechas de ser dirigido por fuerzas políticas opuestas al mandatario y con influencia en el Ministerio Público como organismo de control. Resultaría muchísimo más conveniente para Petro y la democracia que un alcalde elegido en comicios sea evaluado en los mismos, y no en los escritorios de posibles rivales políticos. En esto último tiene especial responsabilidad, sin ser el tema del artículo, la estructura jurídica legada por la Constitución de 1991.

Conclusiones

La izquierda colombiana ha tenido su más grande éxito en haber alcanzado la Alcaldía de Bogotá en tres ocasiones consecutivas. Sin embargo, distintos retos han aparecido a este fenómeno político. En primer lugar, los alcances del Gobierno local han ubicado a los gobernantes en el escenario de lo realizable, como es el caso de Luis Eduardo Garzón. En segunda instancia, hechos de corrupción o mal funcionamiento administrativo han golpeado el apoyo de algunos de estos mandatarios e hicieron que Samuel Moreno Rojas no pudiese terminar su administración. Finalmente, sectores políticos del establecimiento y medios de comunicación han lanzado fuertes ataques a los mandatarios, llevando a que el último de ellos fuera objeto de dos procesos que pusieron en riesgo su continuidad: la revocatoria del mandato y la pérdida de la investidura. Aparentemente superado el segundo, el alcalde se enfrenta al primero y a la posibilidad de gobernar en el tiempo que le resta de ejercicio.

Bibliografía

Boudon, Lawrence (2000), "Party system deinstitutionalization: The 1997-98 Colombian elections in historical perspective", en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Fall, 2000.

Duque, Javier (2006), *Subinstitucionalización de los partidos políticos tradicionales y emergencia de organizaciones políticas alternativas*, Colombia 1986-2004, Flacso, Argentina

Estrada, Jairo (2007), "Proyectos de izquierda y gobiernos alternativos: un análisis de la experiencia colombiana reciente", en Stolowicz, Beatríz (coord.), *Gobiernos de izquierda en Latinoamérica: un balance político*, Bogotá, Ediciones Aurora.

Gilhodes, Pierre (1995), "Los partidos políticos, 1990-95", en Leal Buitrago, Francisco (comp.), *En busca de la estabilidad perdida*, Bogotá, Tercer Mundo, 63-92.

Giraldo, Fernando (2007), "Partidos y sistema de partidos en Colombia", En Roncagliolo y Meléndez, *La política por dentro. Cambios y continuidades en las organizaciones de los países andinos*. International IDEA.

Guerrero, Santiago (2004), *Las terceras fuerzas en Colombia: El caso del Polo Democrático Independiente (PDI)*, monografía de grado, Bogotá, Universidad de los Andes.

Pérez, Nadia Jimena (2008), *El Polo Democrático Alternativo PDA: origen, organización y posicionamiento como tercer partido competitivo en el sistema de partidos colombiano*, tesina de maestría, Universidad de Salamanca.

Pizarro, Eduardo (1997), "¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia hoy", en revista *Análisis Político* Nro. 31.

Rodríguez, César (2005), "La nueva izquierda en Colombia", en Rodríguez, Barret y Chávez (comp.), *La nueva izquierda en América Latina*, Grupo Editorial Norma.

Valencia, Luis Carlos (2008), "Certezas, paradojas e incertidumbres del Polo Democrático Alternativo", en Ramírez, Franklin (ed.), *La innovación partidista de las izquierdas en América Latina*, Ildis-FES.

Páginas de internet

Archivo *El Tiempo*, en www.eltiempo.com

Archivo *El Espectador*, en www.elespectador.com

Gantiva Silva, Jorge (2007), "El proceso de unidad y las perspectivas del PDA. ¿Qué izquierda construir?", en revista *Espacio Crítico*, #6, consultada en www.espaciocritico.com (2 de marzo de 2009).

Novoa, Armando (2003), *La reforma política de 2003: menos partidos, ¿más democracia?*, consultado en www3.terra.com.co/elecciones_2007/articulo/html/vbe206.htm (10 de febrero de 2009).

Registraduría Nacional del Estado Civil, en www.registraduria.gov.co